



## Consejo Económico y Social

Distr.  
GENERAL

E/CN.4/1991/SR.12  
6 de mayo de 1991

ESPAÑOL  
Original: INGLÉS

### COMISION DE DERECHOS HUMANOS

47° período de sesiones

#### ACTA RESUMIDA DE LA 12a. SESION

celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra,  
el martes 5 de febrero de 1991, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. MARTIUS (Alemania)

#### SUMARIO

Cuestión de la violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina (continuación)

El derecho de los pueblos a la libre determinación y su aplicación a los pueblos sometidos a una dominación colonial o extranjera o a ocupación extranjera (continuación)

Violaciones de los derechos humanos en el Africa meridional: informe del Grupo Especial de Expertos

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además, incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento, a la Sección de Edición de los Documentos Oficiales, Oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas se reunirán en un documento único que se publicará poco después de la clausura del período de sesiones.

GE.91-10425/3018f

SUMARIO (continuación)

Consecuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la asistencia política, militar, económica y de otra índole que se presta al régimen colonialista y racista del Africa meridional

Aplicación de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid

Aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial

Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA (tema 4 del programa) (continuación) (E/CN.4/1991/6 a 8, 60 a 62, 65 y 67; A/45/3, 13 y Add.1, 35 y Corr.1, 84, 306, 503, 576, 595, 608 a 614 y 726)

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA LIBRE DETERMINACION Y SU APLICACION A LOS PUEBLOS SOMETIDOS A UNA DOMINACION COLONIAL O EXTRANJERA O A OCUPACION EXTRANJERA (tema 9 del programa) (continuación) (E/CN.4/1991/13 y 14; E/CN.4/1991/NGO/2 y A/45/488)

1. La Srta. CHAALAN (Observadora de la República Arabe Siria) hace uso de la palabra en ejercicio de su derecho de respuesta y dice que no se ajusta a los hechos la alegación de la Liga Internacional para los Derechos y la Liberación de los Pueblos en el sentido de que en Siria se priva a los curdos de su identidad nacional. Los ciudadanos sirios de origen curdo forman parte integrante de la sociedad siria. Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y son iguales ante la ley de conformidad con la Constitución siria. Así pues, los ciudadanos sirios de origen curdo disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos y participan activamente en todos los aspectos de la vida del país.

2. Quizá habría sido más útil que la Liga hubiera dirigido su atención a la situación explosiva existente en la Palestina ocupada, a la violación por Israel de los derechos palestinos y a las trágicas condiciones en que la población palestina se ve obligada a vivir.

3. El Sr. AL-OTHMAN (Observador de Kuwait), haciendo uso de la palabra en ejercicio de su derecho de respuesta, dice que el representante del Iraq ha hecho un intento desesperado para deformar la historia de Kuwait. Su delegación no tiene necesidad de defender la dinastía Al-Sabah, la cual, como es bien sabido, disfruta del pleno apoyo del pueblo kuwaití.

4. Antes de la invasión de Kuwait, el Presidente del Iraq concedió a Al-Sabah, el emir de Kuwait, la más alta distinción iraquí como prueba de su aprecio y gratitud al pueblo de Kuwait. Este hecho debería tenerse presente al escuchar las declaraciones de la delegación del Iraq acerca de los antecedentes históricos.

5. El Sr. ROMA DE ALBUQUERQUE (Portugal), hablando en ejercicio de su derecho de respuesta, dice que la delegación de Indonesia afirma que la libre determinación para Timor oriental es una falsa cuestión y que el pueblo de ese territorio eligió libre y democráticamente su integración en Indonesia. No es ésa la opinión de las Naciones Unidas, como se desprende de la resolución 31/53 de la Asamblea General. La cuestión de Timor oriental está sometida todavía al Comité Especial de Descolonización. Las Naciones Unidas confirmaron que el así llamado "acto" de 31 de mayo de 1976, por el que Timor oriental quedó integrado en Indonesia, no fue una opción libre y democrática para Timor oriental y decidieron que la integración no podía realizarse a menos que existiera tal opción y sólo cuando ésta se ejercitara.

6. Portugal nunca negó tener una parte de responsabilidad por las dificultades relacionadas con el proceso de descolonización en Timor oriental. Sin embargo, eso no justifica la conquista militar por parte de Indonesia. Su Gobierno no se opondrá a la voluntad del pueblo de Timor oriental, aun cuando la decisión que adopte sea en favor de la integración en Indonesia. Si el Gobierno de Indonesia está tan seguro de lo que desea el pueblo de Timor oriental, el orador no comprende su negativa a permitir que el territorio ejerza su derecho de libre determinación.

7. El Sr. STEEL (Reino Unido), tomando la palabra en ejercicio de su derecho de respuesta, comunica a la delegación del Iraq que sólo hay dos cuestiones que preocupan a la Comisión, a saber, cómo observa el Iraq los derechos humanos en Kuwait y cómo el Gobierno del Iraq observa los derechos humanos en el Iraq. Los hechos hablan por sí mismos.

8. El Sr. DEESRISUK (Observador de Tailandia), haciendo uso de la palabra en ejercicio de su derecho de respuesta, da las gracias a la Federación Internacional Terre des Hommes por poner en conocimiento de la Comisión la situación crítica de los camboyanos desplazados que viven en Tailandia como consecuencia del conflicto que vive ese país. Existen, sin embargo, algunos puntos que desearía examinar más detenidamente con objeto de arrojar alguna luz sobre las operaciones de socorro a lo largo de la frontera tailandesa-camboyana.

9. Desde principios del decenio de 1980, Tailandia, en cooperación con la Operación de las Naciones Unidas de Socorro en la Frontera (UNBRO) y con organizaciones no gubernamentales, viene prestando asistencia a unos 310.000 camboyanos desplazados. Hay nueve campamentos asistidos por la UNBRO y administrados por los propios camboyanos que son accesibles a los organismos internacionales de socorro. En el transcurso de los años se viene intentando hacer la vida más tolerable en esos campamentos mejorando para ello los servicios médicos y de nutrición, estableciendo escuelas y centros de capacitación y organizando un conjunto de actividades para todos los sectores de la población de tales campamentos. Infortunadamente, tal vez sea necesario suspender algunos de esos programas y actividades a causa de las dificultades financieras de la UNBRO.

10. Los camboyanos que se encuentran en Tailandia pueden elegir el campamento en el que deseen vivir, entre los varios que existen, y ha habido algunos casos en los que, por razones de reunión de familias o de protección o repatriación voluntaria se ha permitido a camboyanos el traslado de un campamento a otro.

11. En cuanto a la repatriación de camboyanos desplazados, Tailandia está dispuesta a cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para repatriar a los camboyanos tan pronto como se haya encontrado una solución política al problema.

12. Finalmente, el orador desea informar a la Federación Internacional Terre des Hommes de que por el momento han quedado en suspenso los planes iniciales de cerrar el campamento O'Troa en la provincia de Sri Saket y que este campamento sigue abierto y ofrece acceso normal a los organismos de socorro interesados.

VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AFRICA MERIDIONAL: INFORME DEL GRUPO ESPECIAL DE EXPERTOS (tema 5 del programa) (E/CN.4/1991/9 y 10; A/45/615)

CONSECUENCIAS ADVERSAS QUE TIENE PARA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS LA ASISTENCIA POLITICA, MILITAR, ECONOMICA Y DE OTRA INDOLE QUE SE PRESTA AL REGIMEN COLONIALISTA Y RACISTA DEL AFRICA MERIDIONAL (tema 6 del programa) (E/CN.4/Sub.2/1990/13 y Add.1)

APLICACION DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA REPRESIÓN Y EL CASTIGO DEL CRIMEN DE APARTHEID (tema 15 del programa) (E/CN.4/1991/40 y Add.1 y 2, 41 y 42; A/RES/45/90)

APLICACION DEL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA EL SEGUNDO DECENIO DE LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL (tema 16 del programa) (E/CN.4/1991/45)

13. El Sr. MARTENSON (Secretario General Adjunto de Derechos Humanos) presenta los temas 5, 6, 15 y 16 del programa y dice que éstos versan sobre uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas: la eliminación de la discriminación. En la propia Carta se insiste en "la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas" y también se exhorta al respeto a los derechos humanos "sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".

14. Ciertamente, la eliminación del racismo y de la discriminación racial es condición fundamental para lograr los objetivos de las Naciones Unidas de preservar la paz mundial y proporcionar mejores condiciones de vida. La discriminación racial puede suscitar entre los Estados unos conflictos que agraven y pongan en peligro la estabilidad general. En el seno de la sociedad, la discriminación deniega la plena participación de grupos y de ciudadanos en los procesos económicos, políticos y sociales, y también conculcan los derechos que les corresponden.

15. El objetivo de eliminar la discriminación, y particularmente la discriminación racial, es de los que afectan a todas las actividades de las Naciones Unidas, ya sea el cumplimiento de tratados o situaciones de derechos humanos, investigaciones y estudios, establecimiento de normas o servicios de asesoramiento e información pública.

16. Tres de los cuatro temas que se examinan se refieren a la situación de los derechos humanos en Sudáfrica, mientras que, con arreglo al cuarto tema, la Comisión examinará la aplicación del Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial en el plano mundial.

17. En lo referente al tema 5 del programa, la cuestión de la discriminación, y en particular la del apartheid, ha adquirido la máxima importancia desde el primer período de sesiones de la Asamblea General. Desde el principio mismo, el odioso sistema de apartheid -la forma de racismo institucionalizado más patente- viene siendo objeto de actividades de las Naciones Unidas tendientes a su eliminación.

18. Desde hace muchos años, la Comisión viene prestando su más detenida atención a la eliminación del apartheid y puede justificadamente sentirse

satisfecha por su historial como iniciadora y supervisora de muchas de las medidas e instrumentos que figuran entre las armas más eficaces del arsenal empleado por las Naciones Unidas en la lucha contra la discriminación racial. El orador se refiere, en particular, al establecimiento del Grupo Especial de Expertos, al estudio de las consecuencias que la asistencia extranjera acarrea para los derechos humanos en Sudáfrica y también a la Convención sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

19. Desde su establecimiento en 1967, el Grupo Especial de Expertos sobre el Africa Meridional viene teniendo al corriente a la Comisión sobre las graves violaciones de los derechos humanos que están institucionalizadas bajo el sistema del apartheid. En el transcurso de los años, el mandato del Grupo se ha ampliado constantemente gracias a varias resoluciones de la Comisión y del Consejo Económico y Social.

20. El informe que actualmente tiene ante sí la Comisión (E/CN.4/1991/10) se basa en una misión efectuada en los Estados de primera línea en agosto y septiembre de 1990, durante la cual se celebraron audiencias en Londres, Dar-es-Salaam, Lusaka y Harare. La misión fue realizada conjuntamente con el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias y arbitrarias. Durante esta misión se recogió información sobre las políticas y prácticas que violan los derechos humanos en el Africa meridional y se escuchó a 64 testigos.

21. El Presidente del Grupo Especial de Expertos hará la presentación del informe, en el que se documenta la persistente situación grave de los derechos humanos que todavía existe no obstante algunas medidas alentadoras adoptadas el pasado año. Acaban de anunciarse otras medidas encomiables tendientes a la eliminación de la base jurídica de la discriminación racial. Sin embargo, la Comisión sabe muy bien que, según demuestra el informe del Grupo Especial de Expertos, será preciso adoptar otras medidas para asegurar la democracia, poner fin a violaciones tales como los malos tratos a prisioneros, y velar por que mejore realmente la actual situación de los derechos humanos de la población negra una vez que se hayan derribado los pilares del apartheid.

22. A lo largo de los años, el Grupo Especial de Expertos ha inscrito en su haber muchas realizaciones en su calidad de primer mecanismo establecido por la Comisión para la determinación de hechos en materia de derechos humanos. Uno de los miembros destacados del Grupo de Expertos ha sido el profesor Branimir Jankovic (Yugoslavia), y el orador siente tristeza en tener que comunicar a la Comisión el fallecimiento del profesor ocurrido en septiembre de 1990. Otro miembro destacado del Grupo de Expertos, el Sr. Humberto Díaz Casanueva, de Chile, ha presentado su dimisión por motivos de salud. El orador rinde homenaje a la valiosa contribución aportada por estos dos distinguidos juristas.

23. Varios años después del establecimiento del Grupo Especial de Expertos, y a la luz de la persistencia del sistema de apartheid, se comprobó que habría de investigarse la asistencia exterior que hacía posible la continuación del apartheid. En 1973, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías decidió evaluar las consecuencias adversas que para el disfrute de los derechos humanos acarrea la asistencia prestada al régimen colonial y racista de Sudáfrica. Ese mismo año se recomendó que se

nombrase un relator especial que emprendiese esa tarea, y desde entonces la Subcomisión, la Comisión y la Asamblea General han venido examinando periódicamente dicha cuestión.

24. La documentación básica para estas actividades figura en un informe preparado y actualizado anualmente por el Relator Especial Sr. Ahmed Khalifa, que contiene una lista de bancos, compañías, empresas transnacionales y demás organizaciones que prestan asistencia al régimen racista de Sudáfrica.

25. La Comisión tiene ante sí el informe más recientemente actualizado, en el que el Relator Especial analiza las medidas de desinversión parcial adoptadas por empresas extranjeras y las medidas adoptadas por el Gobierno de Sudáfrica para contrarrestar las sanciones y reducir su impacto.

26. La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, aprobada por la Asamblea General el 30 de noviembre de 1973, entró en vigor el 18 de julio de 1976. Hasta la fecha 88 Estados la han ratificado o se han adherido a ella. En la Convención se declara al apartheid crimen contra la humanidad, que se define en función de actos "cometidos con el fin de instituir y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente". En la propia Convención se enumera una amplia serie de tales actos.

27. Con arreglo a la Convención, los Estados Partes se obligan a presentar periódicamente informes sobre las medidas legislativas, administrativas o de otro orden que hayan adoptado para poner en práctica las disposiciones de la Convención. Estos informes son revisados por un grupo constituido por tres miembros de la Comisión, los cuales son al propio tiempo representantes de Estados Partes en la Convención.

28. Desde su primer período de sesiones celebrado en 1978, el Grupo de los Tres ha examinado 127 informes presentados por 54 Estados Partes y ha formulado diversas recomendaciones acerca de las medidas que para la puesta en práctica de la Convención deben adoptar los Estados Partes, la Comisión y el propio Grupo. Desgraciadamente, aún no se han recibido muchos de los informes que debían presentarse.

29. La Comisión tiene ante sí el informe del Grupo de los Tres acerca de su período de sesiones de 1991 (E/CN.4/1991/42), que será presentado por su Presidenta/Relatora, Sra. Narcisa L. Escaler, así como una nota sobre la situación de la Convención y de los informes que deben presentarse con arreglo a la misma (E/CN.4/1991/40).

30. A principios del decenio de 1970, las Naciones Unidas sintieron la necesidad de adoptar medidas especiales para sensibilizar la opinión pública e impulsar actividades tendientes a eliminar de la perspectiva mundial al racismo y la discriminación racial. Por lo tanto, la Asamblea General proclamó el decenio 1973-1983 como Decenio de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, y el de 1983-1993 como Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Los objetivos básicos del Segundo Decenio consisten en promover los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción por motivos

de raza, color, descendencia u origen nacional o étnico, a fin de eliminar los prejuicios y la discriminación racial y abolir los regímenes y políticas basados en el racismo.

31. La Asamblea General aprobó un amplio Programa de Acción para el Segundo Decenio, el cual fue completado mediante planes detallados de acción para los períodos 1985-1989 y 1990-1993. Entre las actividades figuraban medidas contra el apartheid, y actividades en materia de educación, enseñanza y capacitación, difusión de información, protección a las minorías, trabajadores migrantes y poblaciones indígenas, aplicación de instrumentos internacionales y actividades desarrolladas mediante la legislación, las instituciones y los procedimientos de recurso en el plano nacional.

32. Durante el pasado año, el Centro de Derechos Humanos ha proseguido vigorosamente sus actividades tendientes a erradicar todas las formas de discriminación racial y aplicar el programa hasta donde lo permitan los recursos disponibles. Desgraciadamente, la falta de recursos seguros garantizados para el programa del Decenio constituye un grave impedimento para su aplicación.

33. En su calidad de Coordinador del Programa de Acción para el Segundo Decenio, del sistema de las Naciones Unidas, el orador se ha esforzado por dar especial prioridad a los esfuerzos de las Naciones Unidas en esa esfera. La lucha contra el racismo afecta a todos, y uno de sus objetivos es poner en guardia a cada uno de los órganos de las Naciones Unidas respecto de la necesidad de actuar contra la discriminación racial, de forma que se refuercen mutuamente todas las actividades de la Organización. En mayo de 1990 se convocó una consulta entre organismos para ese fin, a raíz de la cual se pidió a cada organismo u órgano que designase un centro de coordinación para las actividades contra la discriminación racial. A principios de la primavera de 1991 se celebrará una nueva consulta entre los organismos.

34. Una de las actividades clave del programa de 1990 fue el Seminario sobre factores políticos, históricos, económicos, sociales y culturales que contribuyen al racismo, la discriminación racial y el apartheid, celebrado en Ginebra en diciembre de 1990. A este Seminario, organizado bajo el mandato de la Comisión, asistieron representantes de Estados Miembros, de órganos de las Naciones Unidas, de organismos especializados y de organizaciones no gubernamentales, con el fin de analizar las causas y manifestaciones actuales del racismo y la discriminación racial, y centrar la atención sobre varias formas de discriminación contra grupos vulnerables.

35. Las reflexiones de los participantes sobre los distintos factores que contribuyen al racismo y la discriminación racial fueron resumidas en 21 conclusiones y recomendaciones aprobadas por el Seminario. El informe del Seminario, con inclusión de las recomendaciones, se presenta a la Comisión en su actual período de sesiones, junto con los correspondientes documentos básicos y de trabajo y otros documentos.

36. Un elemento clave al que en el futuro habrá que dedicar mayor atención es la educación y su contribución para crear un clima de tolerancia y comprensión mutuas entre diferentes comunidades. En este contexto, debe tenerse presente que todas las culturas encierran un valor y que cada una de ellas constituye



una parte importante del patrimonio común de todos. Los esfuerzos que se hagan en los primeros años escolares para sensibilizar a las personas y elaborar programas comunitarios de acción más amplios constituyen importantes instrumentos para lograr ese objetivo.

37. La experiencia ha demostrado que las comisiones de relaciones comunitarias pueden aportar una valiosa contribución para promover la tolerancia. Tales instituciones han dado frecuentemente resultados positivos, con un impacto que excede con mucho a los gastos incurridos. Esas comisiones pueden establecerse no sólo en zonas donde realmente han surgido tensiones, sino también como mecanismo general en todas las comunidades para reforzar la comprensión existente entre los grupos e identificar en fase temprana las causas de futuras tensiones. La creación de un ombudsman nacional en materia de discriminación racial ha resultado también una medida eficaz, y el orador sugirió al Seminario que se estudiase la posibilidad de designar un ombudsman en cada Estado.

38. Han quedado ampliamente demostrados los perniciosos efectos de la discriminación, a escala tanto nacional como internacional, y parece que la lucha contra ese fenómeno justificaría un solemne compromiso por parte de todos los dirigentes e instituciones nacionales. Esto no es tan sólo una responsabilidad estatal. De hecho, para emplear los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es más importante que "tanto los individuos como las instituciones" fomenten la tolerancia y rechacen la discriminación y los prejuicios. Esto se aplica a los sindicatos, asociaciones de maestros y partidos políticos, pero es igualmente importante que se incorporen a esta tarea los dirigentes religiosos, espirituales y culturales.

39. La Comisión tiene una importante contribución que hacer a la lucha por la igualdad y contra la discriminación mediante su debate y sus decisiones sobre el Segundo Decenio en relación con el tema 16. Según decidió la Comisión en su anterior período de sesiones, el tema que había de tratarse en 1991 era el relativo a los "medios y procedimientos para denegar el apoyo a los regímenes racistas con objeto de obligarles a modificar sus políticas". Otro tema de estudio es la recomendación de la Subcomisión de que se declare un tercer decenio contra el racismo. El orador ha formulado algunas sugerencias al respecto en su declaración ante la Comisión en la sesión de apertura.

40. El orador confía en que los debates y decisiones de la Comisión sobre estos temas sumamente importantes del programa serán de gran utilidad para orientar y dirigir las actividades de las Naciones Unidas contra la discriminación.

41. La Sra. ESCALER (Filipinas), al presentar el informe del Grupo de los Tres creado en virtud de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (E/CN.4/1991/42), dice que el Grupo ha examinado el segundo informe periódico de Panamá (E/CN.4/1991/40/Add.1) y el informe inicial de Bolivia (E/CN.4/1991/40/Add.2) y ha tomado nota de que ambos Estados Partes han cumplido los compromisos contraídos en virtud de la Convención. A la luz de las opiniones expresadas por dos Estados Partes, el Grupo ha examinado también el carácter e importancia del papel que desempeñan en Sudáfrica las empresas transnacionales.

42. Resumiendo las conclusiones y recomendaciones del Grupo, expuestas en la sección V de su informe, la oradora dice que el Grupo ha expresado su reconocimiento a los representantes de Panamá y Bolivia, ha tomado nota con preocupación de que sólo dos Estados Partes han presentado informes periódicos desde la celebración del 46° período de sesiones de la Comisión, ha tomado nota con pesar del número de informes pendientes y ha instado a los Estados Partes de que se trata a que aceleren la presentación de sus informes en cumplimiento de sus obligaciones. La oradora señala a la atención del Grupo los llamamientos que figuran en el párrafo 28 del informe y la recomendación del Grupo, a que se hace referencia en el párrafo 40, de que es preciso reunirse cada dos años en vez de anualmente debido al cambio de periodicidad en la presentación de los informes.

43. Al concluir su informe, el Grupo reitera la conveniencia de realizar esfuerzos decididos para poner fin a las políticas y prácticas de apartheid del Gobierno sudafricano, mediante negociaciones basadas en el principio de justicia y paz para todos, y sostiene que, no obstante los limitados progresos efectuados durante el pasado año, el mantenimiento de las sanciones y otras formas de presión sigue siendo un medio importante y efectivo de poner fin al sistema de apartheid en Sudáfrica.

44. El Sr. AMOO-GOTTFRIED (Ghana), tras felicitar por su informe (E/CN.4/1991/10) al Grupo Especial de Expertos sobre el África Meridional, dice que, pese a las buenas intenciones del Presidente De Klerk al anunciar planes tendientes a la reforma política, la situación no ha cambiado en la práctica, por lo que el Consejo del Grupo Africano parece estar justificado al recomendar más precaución y menos euforia. Los informes procedentes de Sudáfrica indican que la policía sigue disfrutando de considerables poderes para detener e interrogar sin que medie acusación, y que siguen produciéndose actos de violencia, ya sea con la complicidad de la policía o con la participación de las fuerzas de seguridad o de extremistas blancos, urdidos invariablemente de tal manera que la culpa se atribuye a choques entre grupos negros rivales. También se ha informado de algunos casos de asesinato, y las confesiones del capitán Dirk Coetzee parecen indicar que hubo varios asesinatos cuya responsabilidad ha de imputarse a las autoridades sudafricanas.

45. A pesar de las así llamadas reformas políticas, permanece en vigor el artículo 29 de la Ley de Seguridad Interna. Asimismo, se ha observado que algunas muertes se han producido durante la detención o la prisión preventiva. En el informe se menciona también que algunos niños sudafricanos siguen siendo objeto de detención, torturas, malos tratos y persecuciones si organizan protestas en la escuela.

46. Así pues, su delegación hace suya la conclusión del Grupo Especial de Expertos de que, no obstante las medidas positivas y alentadoras anunciadas por los dirigentes sudafricanos, las vidas de los sudafricanos negros siguen caracterizándose por la injusticia y la falta de humanidad. Asimismo es de lamentar que, mientras que varios países han reducido su comercio con Sudáfrica, ciertos países del Extremo Oriente y de Europa están procurando llenar el vacío así producido, con el consiguiente menoscabo de la acción internacional contra Sudáfrica y la consiguiente prolongación de los sufrimientos de la mayoría negra.

47. Su delegación encomia a los Estados Partes que han presentando informes con arreglo al artículo VII de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. Espera que aquellos Estados que todavía no lo hayan hecho ratifiquen sin demora este instrumento o se adhieran a él en vista de los indicios contradictorios procedentes de Sudáfrica. En particular, insta a todos los Estados cuyas empresas transnacionales sigan negociando con Sudáfrica a que adopten medidas para poner fin a esos vínculos.

48. Aunque su delegación acoge con beneplácito, como un paso en la buena dirección, las nuevas medidas de reforma política recientemente anunciadas por el régimen sudafricano, previene sin embargo contra la euforia, y siente pesar por la decisión aparentemente apresurada de algunos países de levantar las sanciones. Los acontecimientos del pasado año hacen pensar que será preciso mantener la presión internacional para asegurar que los órganos estatales de Sudáfrica demuestren, a la vez, la capacidad y la buena disposición para aplicar plenamente esas medidas.

49. Por consiguiente, su delegación se asocia a los dirigentes de los movimientos de liberación de Sudáfrica al pedir que se mantengan las sanciones hasta que todos los presos políticos hayan sido puestos en libertad, se haya aplicado el principio de "una persona, un voto" y se haya facilitado el retorno de los exiliados políticos. Aun cuando celebra todas las declaraciones positivas formuladas y las medidas adoptadas por el Gobierno de Sudáfrica, previene, pues, contra toda disminución de la presión hasta tanto haya alcanzado una fase irreversible el desmantelamiento del apartheid.

50. Su delegación hace suyas todas las recomendaciones del Grupo Especial de Expertos y recomienda a la Comisión que las apruebe.

51. El Sr. de RIVERO (Perú) dice que cuando la Comisión inició su decidida acción contra el apartheid en 1967, el Perú estuvo en primera fila y fue miembro fundador del Grupo Especial de Expertos sobre el África Meridional. Desde entonces, su delegación nunca ha sido pesimista, escéptica o indiferente en su posición contra el apartheid, aun cuando el apartheid parecía una característica indeleble de la política de la Sudáfrica blanca. Su delegación participó activamente en la preparación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. El Perú es miembro del Comité Especial contra el Apartheid y ha presidido la Conferencia Mundial sobre Sanciones contra la Sudáfrica Racista, celebrada en junio de 1986, así como el Grupo de Trabajo sobre los Presos Políticos en Sudáfrica, que se reunió de 1986 a 1988.

52. La lucha contra el apartheid está dando finalmente muestras de progresos; los dirigentes blancos de Sudáfrica han comenzado a reconocer que esa política sólo ha logrado generar odios, enfrentamientos y muertes, además del rechazo de todo el mundo, y que es inevitable conducir el país hacia una democracia sin exclusiones de ningún grupo étnico.

53. Como consecuencia, el umbral de la década de los 90 se ha caracterizado por unos cambios que nadie imaginó que podrían tener lugar en tan poco tiempo. Nelson Mandela ha sido liberado luego de 27 años de cautiverio, Oliver Tambo pudo regresar de su exilio, y organizaciones políticas de

oposición han sido legalizadas; se ha levantado el estado de emergencia en el Estado Libre de Orange y en las provincias del Cabo y de Natal; la Ley de servicios residenciales separados ha sido abolida; y se han formado comisiones para investigar a las fuerzas de seguridad. Entre otras medidas similares, anunciadas en la reciente inauguración de la sesión del Parlamento de la República de Sudáfrica, figuran propuestas para abolir la Ley de delimitación de zonas residenciales, las Leyes sobre la propiedad de la tierra y la Ley de inscripción de la población.

54. Su delegación coincide con el Congreso Nacional Africano en que estas medidas constituyen un paso positivo, en consonancia con el principio de que Sudáfrica constituye una sola nación y que el Gobierno debe derivar su legitimidad de los gobernados; debe crearse un clima para la elaboración de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente elegida sobre la base de la igualdad de todos los ciudadanos. Análoga importancia para el progreso tienen medidas tales como la derogación de las leyes de seguridad, el retorno de exiliados, la supresión de la violencia que practican grupos paramilitares de extrema derecha y la igualdad del voto. Asimismo, su delegación manifiesta su satisfacción por el reciente entendimiento entre Nelson Mandela y el líder Buthelezi, ya que un clima de conciliación y de confianza entre agrupaciones políticas rivales de la población negra reviste importancia fundamental. Sin embargo, aún queda por recorrer un largo camino sembrado de trampas, lo que requerirá un esfuerzo cauteloso de los sudafricanos y vigilancia por parte de la comunidad internacional.

55. El Sr. ZHAN Daode (China) dice que uno de los principales propósitos de las Naciones Unidas es promover la igualdad racial. Gracias a los esfuerzos desplegados durante muchos años, la mayoría de los países y de los pueblos han aceptado el concepto de la completa igualdad, independientemente de la raza, color u origen étnico, como un derecho humano fundamental. Es particularmente objeto de satisfacción el hecho de que la independencia nacional lograda por el pueblo de Namibia gracias a su incansable lucha apoyada por la comunidad internacional, haya sido una característica de los nuevos progresos presenciados en el pasado año; su delegación da una cordial bienvenida a la delegación de observadores de Namibia, que asiste por primera vez a un período de sesiones de la Comisión.

56. Sin embargo, la población negra de Sudáfrica aún sigue sometida al bárbaro sistema de apartheid, sistema rechazado hace mucho tiempo por el mundo civilizado. La lucha sin descanso del pueblo negro y las sanciones impuestas de manera sostenida por la comunidad internacional han comenzado finalmente a forzar a las autoridades sudafricanas a adoptar algunas medidas tendientes a una solución política, tales como el gradual levantamiento del estado de emergencia, la puesta en libertad de algunos activistas negros y la supresión de las prohibiciones impuestas al Congreso Nacional Africano y otras organizaciones antirracistas. Por otra parte, las autoridades no han abolido todavía la legislación fundamental del apartheid. El sistema del apartheid está profundamente arraigado y no desaparecerá por sí mismo.

57. Por lo tanto, antes que mitigar sus esfuerzos, lo que debe hacer la comunidad internacional es incrementar su apoyo a los movimientos de liberación nacional y a los Estados de primera línea, y seguir aplicando sanciones contra el régimen sudafricano hasta que queden abolidas sus

políticas racistas. En la Declaración sobre el Apartheid y sus Consecuencias Destructivas para el Africa meridional, aprobada por la Asamblea General en su resolución S-16/1, se estipulan explícitamente los principios y programas de acción para el arreglo de la cuestión sudafricana. Es de esperar que las autoridades sudafricanas interpreten correctamente la actual situación, traten de adoptar las medidas necesarias para un arreglo político de conformidad con dicha Declaración y adopten medidas sustantivas para abolir el sistema del apartheid de forma que todo el pueblo sudafricano pueda disfrutar de iguales derechos, cualquiera que sea su raza, color o sexo.

58. El Gobierno y el pueblo chinos se han opuesto invariable y firmemente al racismo y continuarán apoyando al pueblo de Sudáfrica hasta que salga victorioso en la erradicación del apartheid. China exhorta a la comunidad internacional a que brinde más apoyo al pueblo sudafricano y a las organizaciones que luchan contra el apartheid en Sudáfrica y en los Estados vecinos, sin olvidar una constante coordinación en la imposición de sanciones efectivas. En particular, hace un llamamiento a los países que pueden ejercer influencia política, económica y militar sobre Sudáfrica para que contribuyan a los esfuerzos tendientes a eliminar el apartheid y poner fin a la dominación racista en ese país.

59. La Sra. REGAZZOLI (Argentina) dice que la armonía y la paz internacionales sólo se alcanzarán mediante el respeto de los derechos humanos, como una totalidad indivisible, que permitan que cada nación pueda ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. A este respecto, son motivo de optimismo algunos acontecimientos ocurridos durante el pasado año, entre ellos la legalización del ANC y la liberación de Nelson Mandela. La comunidad de naciones espera que las anunciadas propuestas respecto a la abolición del sistema que sanciona la discriminación racial en el Africa meridional -único sistema de violación masiva de los derechos humanos aún vigente en el mundo- signifiquen que la ignominiosa institución del apartheid sea íntegramente desmantelada.

60. Sin embargo, su delegación observa con preocupación la persistencia de ciertas acciones que se señalan en el informe del Grupo Especial de Expertos sobre el Africa Meridional (E/CN.4/1991/10) -como por ejemplo, la tortura sistemática de niños y adolescentes durante la detención y su hostigamiento una vez que recuperan la libertad.

61. Está justificado que en las actividades del Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial se haga hincapié en el grotesco sistema del apartheid, sistema que no es susceptible ni de cambios ni de transformaciones, sino que sólo puede ser completamente eliminado. Su mantenimiento constituye una afrenta a la conciencia de la humanidad, y no es posible tolerarlo por más tiempo.

62. Es de esperar que el Gobierno sudafricano permita que el Grupo Especial de Expertos visite ese país y realice investigaciones de conformidad con su mandato, y que cumpla lo antes posible su promesa de derogación de las leyes del apartheid y agilice las negociaciones con los líderes de la mayoría. Cabe esperar que el Gobierno de Pretoria haya llegado a comprender que sólo una sociedad libre y pluralista, con igualdad de derechos para todos los habitantes, garantizará un futuro de paz y prosperidad en Sudáfrica.

63. El Sr. HARUN-UR-RASHID (Bangladesh) dice que su delegación se siente alentada por el hecho de que el Secretario General Adjunto de Derechos Humanos haya tomado el año pasado la iniciativa de convocar una consulta entre organismos a fin de asegurar que las actividades de otras organizaciones de las Naciones Unidas permitan realizar el objetivo de impedir la discriminación racial.

64. Los recientes cambios políticos que se han producido en todo el mundo, y particularmente el declive del enfrentamiento ideológico bipolar, han proporcionado nuevas oportunidades para la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos. Todo el mundo reconoce que las violaciones de los derechos humanos representan una importante amenaza para la paz. Sin embargo, el racismo subsiste aún, pese a la proclamación del Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Las inquietantes señales del resurgir de la extrema derecha y del nacionalismo virulento podrían dar lugar a casos de racismo y antisemitismo. El mundo ha entrado en una fase nueva e inexplorada, en la que es necesario evitar el caos y asegurar el respeto a los derechos humanos.

65. Las deliberaciones sobre la necesidad de combatir el racismo y la discriminación racial llevan naturalmente a examinar la situación en Sudáfrica. A este respecto, la Comisión tiene ante sí tres documentos, a saber: el informe del Grupo de los Tres (E/CN.4/1991/42); el informe actualizado del Relator Especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (E/CN.4/Sub.2/1990/13 y Add.1), y el informe definitivo del Grupo Especial de Expertos sobre el Africa Meridional (E/CN.4/1991/10).

66. En el informe del Grupo de los Tres se pone de manifiesto la explotación de los recursos y del pueblo de Sudáfrica en detrimento de la mayoría de la población y, entre otras cosas, se recomienda que los Estados Partes en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid refuercen su cooperación a nivel internacional y adopten medidas de conformidad con las decisiones del Consejo de Seguridad.

67. El informe del Relator Especial se centra en las circunstancias que permiten soslayar las sanciones comerciales, las deficiencias de que adolecen las medidas adoptadas por los gobiernos en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad y el marcado aumento de las exportaciones a Sudáfrica, mientras que en el informe del Grupo Especial de Expertos se hace especial hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Sudáfrica.

68. Su delegación hace suyas las recomendaciones formuladas en estos tres informes.

69. En los últimos días, se ha informado al mundo acerca de la intención del régimen de Sudáfrica de abolir la notoria legislación que sirve de base al apartheid. Es éste un acontecimiento grato y positivo. Por otra parte, su delegación comprende perfectamente la cautela manifestada por el Presidente Adjunto del ANC y conviene en que, a menos que el progreso hacia la eliminación del apartheid sea irreversible, no deben mitigarse las sanciones.

70. Bangladesh es firme partidaria de la eliminación del aborrecido sistema del apartheid, que repugna no sólo a los principios del derecho internacional, sino también a la dignidad humana. De ahí que sea parte en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y cumpla sus disposiciones, y su delegación dirige un llamamiento a los Estados que aún no lo han hecho para que ratifiquen esta Convención o se adhieran a ella sin más demora.

71. Los derechos humanos y las libertades fundamentales garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos han sido incorporados en la Constitución de su país y se hacen cumplir por los tribunales. Además de tales salvaguardias constitucionales contra la discriminación por motivos de raza, casta, creencia o sexo, existen también disposiciones penales para los delitos relacionados con el apartheid. La dedicación plena de su Gobierno a la erradicación del apartheid queda demostrada por el papel que desempeña en las actividades internacionales tendientes a establecer una democracia no racial basada en el sufragio de los adultos de Sudáfrica.

72. El Sr. AZIKIWE (Observador de Nigeria) dice que, aun cuando la eliminación del apartheid y de la discriminación racial siguen recibiendo atención prioritaria, el problema continúa sin resolver. Su delegación reitera su rechazo y condena el apartheid y, al paso que elogia a la comunidad internacional por las medidas adoptadas en el transcurso de los años contra el apartheid, desea señalar que la persistencia del apartheid en Sudáfrica constituye una acusación contra el conjunto de esa comunidad. El apartheid sigue impidiendo el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación y es la causa profunda de la crisis y la inestabilidad en Sudáfrica.

73. Ha provocado honda preocupación y escándalo el contenido del informe del Grupo Especial de Expertos sobre el Africa Meridional (E/CN.4/1991/10). En él se revela que en Sudáfrica siguen produciéndose violaciones generalizadas y masivas de los derechos humanos. En el informe se citan casos de exiliados a los que el Gobierno de Pretoria concedió amnistía al amparo de la amnistía general del año precedente y quienes fueron después arrestados al entrar en Sudáfrica. El Grupo de Expertos ha tomado nota de muchos casos de violaciones del derecho a la vida. Se sigue practicando la tortura contra hombres, mujeres y colegiales. En el informe también se hace constar el auge de las actividades desarrolladas por los conservadores y los grupos de extrema derecha, cuyo objetivo declarado es impedir el desmantelamiento del apartheid y la restauración de éste a su forma primitiva.

74. Al evaluar el año que se examina, se señala en el informe que, a pesar de algunas declaraciones del Gobierno de Sudáfrica acerca de su intención de realizar cambios, el Grupo de Expertos observa que la situación en ese país permanece invariable o incluso ha empeorado, y que se advierten contradicciones en la actitud del Gobierno de Sudáfrica. Su delegación suscribe las recomendaciones del Grupo de Expertos, las cuales, si se aplicaran plenamente, acelerarían la eliminación del apartheid, y es partidaria de renovar el mandato del Grupo.

75. Pese al hecho de la pervivencia del apartheid, su delegación no puede pasar por alto los acontecimientos positivos y alentadores que se están

produciendo en Sudáfrica. En febrero de 1990, el Presidente De Klerk anunció algunas medidas trascendentales y la revocación de varias leyes con objeto de reformar el apartheid. En su reciente alocución, pronunciada unos días antes, el Presidente ofrece nuevas pruebas de su intención de renunciar al apartheid e iniciar el proceso de "reforma fundamental".

76. Sin embargo, cabe recordar a este respecto que el apartheid no puede ser reformado, sino que ha de ser totalmente eliminado. Además, no obstante la intención expresa del Gobierno de revocar la Ley sobre la propiedad de la tierra, la Ley de delimitación de zonas residenciales y la Ley de desarrollo de comunidades negras, los correspondientes proyectos de ley aún deben ser aprobados por el Parlamento para que adquieran fuerza legal. También existen otras leyes racistas que el Gobierno, según su propia confesión, no puede revocar, como la Ley de inscripción de la población, en virtud de la cual los sudafricanos quedan clasificados desde que nacen hasta que mueren. Es más, la Constitución sigue siendo un documento racista que impide a la mayoría indígena el acceso al poder político.

77. Su delegación elogia el valor y la iniciativa del Presidente De Klerk. El movimiento hacia el liberalismo es positivo. Los recientes acontecimientos han reducido las diferencias que existen entre los representantes de la mayoría indígena de Sudáfrica y los movimientos de liberación nacional, a la par que han contribuido a crear un clima propicio a un diálogo constitucional entre el Gobierno y esos representantes. Sin embargo, todavía no puede decirse que los cambios habidos hayan puesto a Sudáfrica en la vía de una evolución irreversible hacia la eliminación del apartheid. La prueba de la irreversibilidad debe constituir la participación constitucional legítima de la mayoría indígena y su participación activa en el proceso conducente a la eliminación total del apartheid y al establecimiento de una Sudáfrica libre, unida y democrática.

78. A este respecto, su delegación hace suya la posición adoptada por los movimientos de liberación nacional, en particular por el ANC, de que el Gobierno no puede, a la vez, presidir la transición a la democracia y ser parte en las negociaciones sobre el cambio, ya que estos dos papeles están en pugna entre sí. Por lo tanto, exige que de una asamblea constituyente, democráticamente elegida, regule la transición a una Sudáfrica libre, unida y democrática. Su Gobierno continuará prestando a los movimientos de liberación nacional todo el apoyo diplomático, político y material necesario para la realización de esos objetivos.

79. Su delegación insta, por tanto, a la comunidad internacional a que mantenga las actuales sanciones hasta que haya pruebas de cambios irreversibles hacia la eliminación del apartheid y el establecimiento de una Sudáfrica libre, no racial y democrática, basada en el principio "un hombre un voto". En este contexto, hace un llamamiento a las organizaciones que siguen prestando ayuda a Sudáfrica y comerciando con ella para que se abstengan de hacerlo y ayuden a mantener las actuales sanciones contra ese país. No cabe duda de que es principalmente el empleo o la amenaza del empleo de sanciones contra Sudáfrica, junto con la resistencia activa del pueblo, lo que ha obligado al Gobierno a emprender una política de liberalización y de cambio.



80. En lo referente al informe relativo a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (E/CN.4/1991/42), su delegación observa con preocupación el reducido número de Estados Partes que han presentado sus informes periódicos, y pide a los Estados que aún no lo hayan hecho que presenten tales informes lo antes posible. Asimismo, insta a los Estados que aún no lo han hecho a que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella, en particular a los países que ejercen jurisdicción sobre las empresas transnacionales que operan en Sudáfrica. Su delegación apoya sin reserva las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de los Tres (E/CN.4/1991/42).

81. No hay duda de que las Naciones Unidas siguen desempeñando un papel significativo en la lucha contra el racismo. El Programa de Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial es una demostración práctica de que la Organización ha optado por renunciar a las declaraciones y la fijación de normas en favor de la acción concreta. Esta estrategia ha permitido coordinar las acciones de los Estados Miembros y las diversas organizaciones internacionales y no gubernamentales en la lucha contra el racismo.

82. En opinión de su delegación, la aplicación del Programa de Acción debe seguir contando con la atención prioritaria de la Comisión, haciéndose especial hincapié en la acción contra el apartheid. Si bien su delegación apoya el plan de actividades para la segunda mitad del Segundo Decenio, es partidaria de que se preste mayor atención a la organización de más seminarios, cursillos y conferencias. Además, es preciso intensificar los esfuerzos para proporcionar asistencia y socorro a las víctimas del racismo y de la discriminación racial.

83. Su delegación se congratula de haber participado en la labor relacionada con el proyecto de convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. Espera que no disminuya el interés por la situación de los trabajadores migrantes y se propongan más soluciones para mejorar su condición y prestarles socorro y asistencia. Aun cuando apoya las recomendaciones contenidas en el informe del Secretario General (E/CN.4/1991/43), lamenta que todavía estén pendientes de realización algunas de las actividades previstas en el plan de actividades para la primera mitad del Programa de Acción. Pide a las autoridades competentes de la Secretaría que faciliten los recursos adecuados, autorizados por la Asamblea General, para llevar a cabo todas las actividades aprobadas por la propia Asamblea General.

84. El Sr. PHEKO (Congreso Panafricanista de Azania) dice que el 1º de febrero de 1991, mientras que el Sr. De Klerk de Sudáfrica pronunciaba una alocución ante el Parlamento minoritario racista de la Ciudad del Cabo, varias organizaciones políticas celebraban un mítin multitudinario al exterior del edificio pidiendo que se estableciera inmediatamente una asamblea constituyente electa que redactase una nueva constitución democrática, mayoritaria y no racial del país. Dentro del Parlamento, el Sr. De Klerk proclamó que estaba considerando la posibilidad de suspender o abolir algunas leyes del apartheid que, a juicio del PAC, constituían los "pilares del apartheid". Se trata de una intención muy loable, pero que todavía ha de traducirse en hechos.

85. El 2 de febrero de 1990, el régimen racista sudafricano anunció que levantaría la prohibición impuesta a las organizaciones políticas africanas opuestas al apartheid y al colonialismo, y que entablaría negociaciones con ellas a fin de introducir modificaciones constitucionales para dismantelar el apartheid. Nueve días después el régimen de Pretoria puso en libertad a Nelson Mandela. Sin embargo, todavía quedaban en la cárcel más de 3.000 presos políticos. Se esperaba que éstos serían liberados en cuestión de semanas y que todos los exiliados políticos que lo desearan podrían regresar al país cuando lo estimaran conveniente. Sin embargo, han transcurrido meses sin que se haya producido ningún cambio fundamental, salvo el de las matanzas de africanos en escala que recuerda al genocidio.

86. Se calcula que entre febrero y diciembre de 1990 fueron asesinados unos 10.000 africanos. Un importante factor que ha de tenerse presente al analizar la violencia en Sudáfrica es que los africanos son un pueblo colonizado que vive bajo un régimen racista, cuya obligación moral y legal es proteger a todos los habitantes del país. Las pruebas indican que cuando unos africanos matan a blancos, los delincuentes son siempre detenidos. En cambio, si unos blancos o sus agentes matan a africanos, o si unos africanos matan a otros africanos, raramente son encontrados los culpables. Parece como si hubiera una conspiración para eliminar a la población africana o, por lo menos, para reducir su fortaleza numérica.

87. Los medios de información están controlados por fuerzas que tienen intereses económicos y de otra índole en Sudáfrica, razón por la cual trazan un cuadro idealizado de los "maravillosos cambios" que se están produciendo en ese país. Ahora bien, incluso los mejores apologistas de la reforma del apartheid, como distinta del dismantelamiento de ese funesto sistema, han reconocido que los hechos no están en consonancia con el espectacular anuncio hecho por el Sr. De Klerk en febrero de 1990.

88. Allister Sparks, uno de tales apologistas, ha señalado en un artículo aparecido en el Observer que hay pruebas abrumadoras de que los adversarios del régimen sudafricano estaban muriendo a manos de la policía del Sr. De Klerk. A este respecto, el Presidente del PAC, Sr. Makwetu, ha hecho notar en una declaración de prensa aparecida el 1º de febrero de 1991 que el Sr. De Klerk guarda silencio acerca de las actividades homicidas de los comandos de asesinos a sueldo y de las fuerzas de seguridad, sin que se diga una sola palabra sobre la necesidad de castigar a los culpables. Aún más temible es el hecho de que el régimen sudafricano haya destinado 5.000 millones de rand del presupuesto de sus fuerzas de defensa para operaciones secretas y adquisición de armas.

89. En un discurso pronunciado el 19 de abril de 1990, el Sr. De Klerk se mostró claro y sincero. Rechazó el gobierno por mayoría, calificándolo de simplista e inadecuado para un país como Sudáfrica, y dijo que una pretendida nueva constitución tendría que ser aprobada por el electorado minoritario racista en el curso de un referéndum o una elección. Dijo a los miembros de la minoría blanca que les esperaba un papel clave en la nueva ordenación, y que los que actualmente disfrutaban de plenos derechos políticos no están dispuestos a inclinarse y abandonar con disculpas el escenario de la historia.

90. Hay pruebas sustanciales de que por "negociaciones" el régimen del Sr. De Klerk entiende colusión, capitulación y cooptación de los africanos desposeídos al sistema de apartheid. En estas "negociaciones" no hay presidente ni mediador imparcial alguno de la comunidad internacional, y el Sr. De Klerk es, a la vez, jugador y árbitro, fiscal y juez, opresor y pretendido "liberador".

91. El 7 de agosto de 1990 el Sr. De Klerk envió un emisario al Presidente del PAC, Dr. Mothopeng, desde entonces fallecido, para invitar al PAC a celebrar conversaciones. El PAC, que auténticamente creía en la democracia, declaró que estaba dispuesto a negociar tan pronto como en el programa de las negociaciones se contemplara el gobierno por mayoría, la distribución de los recursos, especialmente la tierra, y una asamblea constituyente elegida según el principio no racial de "una persona un voto" en base a un censo electoral común. Sólo los representantes del pueblo democráticamente elegidos podrían pretender con derecho estar facultados para determinar la naturaleza y el contenido de la nueva constitución.

92. Además, los blancos, que constituyen sólo el 13% de la población de Sudáfrica, se han apoderado de 106.800.000 hectáreas de tierra, dejando tan sólo 15.200.000 hectáreas de tierras estériles para 36 millones de africanos. Los colonos blancos controlan el 80% de la riqueza del país. No se puede dismantelar el apartheid sin corregir este desequilibrio económico, como consecuencia del cual la mayoría indígena africana padece pobreza, enfermedades, subdesarrollo, una tasa muy elevada de mortalidad infantil y una esperanza de vida muy reducida.

93. En su Congreso Nacional, celebrado en diciembre de 1990, el PAC reiteró sus condiciones para la negociación y acordó asimismo que deberían reforzarse las sanciones vigentes contra el régimen sudafricano. El orador dice a este respecto que la Conferencia de Diecinueve Estados Africanos sobre una Zona Comercial Preferencial, celebrada en Swazilandia en noviembre de 1990, pidió asimismo que se aplicaran sanciones a fin de asegurar que el Sr. De Klerk no renuncie a los compromisos contraídos.

94. En 1990, la situación de los derechos humanos en Sudáfrica empeoró hasta un punto jamás alcanzado antes. La Comisión de Derechos Humanos dio cuenta en Johannesburgo de que, entre febrero y octubre de 1990, 2.679 personas habían resultado heridas por actuaciones de la policía en situaciones de agitación política, y que 92 personas permanecían aún detenidas en virtud de la Ley de seguridad interna.

95. Dos meses antes, unos dirigentes del PAC en el exilio no fueron autorizados a regresar al país para asistir al entierro de su Presidente, Dr. Mothopeng. Además, se les denegó en un principio el permiso de entrada en Sudáfrica para celebrar su congreso nacional y consultar a la población africana sobre las negociaciones.

96. En conclusión, el orador dice que es mucho lo que está en juego en Sudáfrica, que es precisamente la razón de que ese rico país nunca haya sido descolonizado.

97. El Sr. AL-OTHTMAN (Observador de Kuwait) dice que su Gobierno nunca dejó de condenar las políticas racistas del Gobierno de Sudáfrica en todos los foros internacionales, y que seguirá haciéndolo en el actual período de sesiones de la Comisión, a pesar de la crisis del Golfo.

98. Comparte la preocupación del Grupo Especial de Expertos sobre el Africa Meridional ante la prórroga parcial del estado de emergencia en Sudáfrica, lo que ha acarreado mayores violencias. Otras fuentes de preocupación son los poderes más amplios otorgados a la policía y a las fuerzas armadas, lo que ha dado lugar a la represión contra estudiantes y sindicalistas, a desplazamientos forzados de la población y a la imposición de restricciones a la libertad de expresión y de conciencia, y eso sin mencionar los casos de torturas de presos, particularmente de niños. El orador ha sentido especial angustia al conocer la detención del Sr. "Mac" Maharaj con arreglo al artículo 29 de la Ley de seguridad interna, lo que significa que su vida está en peligro. También son sumamente lamentables los actos de violencia ocurridos en agosto de 1990 en Natal y en las barriadas negras de la periferia de Johannesburgo.

99. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental que el Gobierno sudafricano está violando flagrantemente. El informe del Grupo Especial de Expertos muestra que la situación no ha evolucionado favorablemente, pese a las reformas anunciadas por el Presidente De Klerk. La bantustanización y otras políticas de apartheid siguen adelante en Sudáfrica a pesar de algunos cambios poco importantes.

100. La Comisión no puede permanecer indiferente ante los sufrimientos de los trabajadores negros, en particular los seis millones de trabajadores agrícolas que viven en condiciones infrahumanas y cuyos salarios constituyen una mera fracción de los que reciben los blancos.

101. El orador suscribe las conclusiones del Grupo Especial de Expertos y le insta a que continúe sus actividades.

102. El Sr. NDIYE (Amnistía Internacional) dice que, durante el pasado año, el Gobierno de Sudáfrica ha adoptado ciertas iniciativas para reducir las violaciones de los derechos civiles y políticos básicos, entre ellas la de levantar las órdenes de restricción impuesta a unas 700 personas, la puesta en libertad de presos de conciencia y demás presos políticos detenidos en virtud del estado de emergencia declarado en el país, y una notable disminución del número de ejecuciones judiciales, las cuales han pasado de más de cien por año a solamente una en 1990.

103. Sin embargo, a su organización le preocupa el hecho de que aún continúen las violaciones graves de los derechos humanos. Son insuficientes las medidas adoptadas para impedir que se torture a los detenidos, a los que frecuentemente se mantiene incomunicados, con resultado de muerte para algunos de ellos. El Gobierno no ha revocado todavía las leyes que permiten la detención indefinida en régimen de incomunicación sin comparecencia a juicio y por las que se concede inmunidad de procesamiento a las fuerzas de seguridad. Tampoco se han adoptado medidas adecuadas para investigar y poner a disposición de la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en la tortura y el asesinato de adversarios del Gobierno.

104. Durante el año 1990, las fuerzas de seguridad hicieron uso de los poderes que les fueron conferidos al amparo del estado de emergencia y de la Ley de seguridad interna para mantener incomunicadas a más de 1.500 personas. A juicio de Amnistía Internacional, la detención en régimen de incomunicación facilita la tortura.

105. Algunos detenidos puestos en libertad han formulado acusaciones de tortura contra la policía. Ocasionalmente, los tribunales han dictado requerimientos contra la policía tras recibir pruebas de malos tratos infligidos a detenidos. Ciertas comisarías de policía han sido citadas repetidamente como lugares donde se tortura. Según información facilitada por las víctimas, en su mayoría jóvenes, en la comisaría de Welverdiend fueron golpeadas, pateadas suspendidas cabeza abajo de una barra de hierro y parcialmente asfixiadas, además de aplicárseles descargas eléctricas. Unos funcionarios de la policía anunciaron que se estaban investigando los métodos empleados en Welverdiend, pero sus conclusiones no se han hecho públicas todavía.

106. Por lo menos 18 personas murieron en 1990 cuando se encontraban detenidas, y tan sólo en un caso ordenó el Gobierno que se abriera una investigación judicial independiente. En su conclusión de que Clayton Sizwe Sithole, detenido en virtud de la Ley de seguridad interna, se había suicidado, el juez de instrucción describió las condiciones en que se había mantenido a la víctima como constitutivas de "graves atentados contra los derechos y prerrogativas normales de todo ciudadano".

107. El que las fuerzas de seguridad no sean responsables, particularmente ante los tribunales, ha dado lugar a una pérdida importante de vidas humanas. En 1990, las fuerzas de seguridad fueron nuevamente responsables de dar muerte a personas civiles inermes, lo que equivale a ejecuciones extrajudiciales. En marzo de 1990, en Sebokeng, 5 personas murieron y 161 resultaron heridas al disparar la policía contra una manifestación pacífica organizada por el Frente Democrático Unido. Tras un clamor popular, el Presidente sudafricano ordenó que se constituyera una comisión judicial de investigación. El juez investigador llegó a la conclusión de que el comportamiento de la policía había sido ilegal e injustificado, y recomendó que el Fiscal General de Transvaal investigase la conducta de los funcionarios de la policía para formular cargos contra ellos. Transcurridos cerca de cinco meses, sigue sin conocerse el fallo del Fiscal General.

108. Su organización insta al Gobierno de Sudáfrica a que vele por que los funcionarios de la policía que cometan homicidios en tales circunstancias sean llevados ante los tribunales.

109. Durante la ola de violencia que a fines de 1990 invadió las barriadas negras del extrarradio de Johannesburgo, hubo persistentes alegaciones de complicidad de las fuerzas de seguridad en asesinatos y otros actos de violencia llevados a cabo contra miembros y partidarios del ANC y organizaciones afines. Una comisión judicial de investigación sobre la presunta participación de las fuerzas de seguridad en asesinatos políticos ha dictaminado recientemente que una unidad militar encubierta, la Oficina de Cooperación Civil (CCB), había estado implicada en intentos de asesinatos de adversarios del Gobierno hasta 1989. La comisión de investigación ha

recomendado que el Fiscal General investigue también varios casos de asesinatos y tentativas de asesinatos con los que estuvieron relacionados miembros de la CCB. Todavía no había indicación alguna de que el Fiscal General haya llegado a una decisión sobre estos casos.

110. En opinión de su organización, el Gobierno de Sudáfrica debe adoptar medidas inmediatas para revocar la legislación que contempla la detención indefinida en régimen de incomunicación sin comparecencia a juicio y para armonizar plenamente todas las leyes con las normas enunciadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Gobierno debe declarar pública e inequívocamente que no se tolerará la tortura ni los malos tratos de presos, y es preciso establecer procedimientos formales para garantizar que todas las acusaciones de esta clase sean investigadas con independencia e imparcialidad.

111. El Sr. RYDER (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres) dice que su organización celebra las medidas positivas adoptadas por el Gobierno sudafricano en febrero de 1990 y las anunciadas durante la semana precedente. Sin embargo, es evidente que el régimen de Pretoria deberá adoptar urgentemente nuevas medidas antes de que pueda decirse que se han producido cambios irreversibles.

112. El mantenimiento de la vigencia de la Ley de seguridad interna y los amplios poderes que ésta confiere al Gobierno y a las fuerzas de seguridad hacen que el levantamiento del estado de emergencia sea en gran parte irrelevante. El régimen puede seguir haciendo lo que ha hecho en virtud de los poderes de emergencia, empleando para ello medios ligeramente más engorrosos, y gran número de presos políticos se encuentran todavía detenidos sin poder acogerse a las garantías judiciales básicas.

113. Además, continúan en el exilio muchos sudafricanos que se comprometieron a conseguir la abolición del apartheid. El Gobierno debe actuar efectivamente a fin de facilitar su pronto regreso.

114. Los cambios anunciados por el Presidente De Klerk en nada contribuyen a alterar la actual situación en que los derechos políticos y el poder se concentran exclusivamente en manos de la minoría sudafricana blanca. El Gobierno no se ha comprometido a realizar el objetivo de "una persona, un voto" en una democracia unida y no racial. Su organización considera que debe convocarse sin más demora una asamblea constituyente auténticamente representativa con objeto de allanar el camino para la adopción de una constitución que consagre el principio del gobierno de la mayoría.

115. Las sanciones internacionales contra Sudáfrica deben mantenerse hasta que todos estos obstáculos se hayan eliminado. El movimiento sindical negro independiente ha declarado que por ahora las sanciones son necesarias, aun cuando espera que llegue el momento en que éstas dejen de tener objeto. Nelson Mandela ha exhortado nuevamente a la comunidad internacional a que no se precipite en revisar las sanciones.

116. El optimismo en cuanto a la evolución futura de Sudáfrica debe moderarse a juzgar por la experiencia del pasado año. El orador se ha sentido particularmente decepcionado ante la inoperancia del Gobierno en cuanto a la

revocación de las disposiciones de la Ley de reforma de las relaciones laborales, de 1968, que restringe considerablemente los derechos sindicales básicos. Si bien todos los sindicalistas son víctimas de una legislación restrictiva, hay tres categorías de trabajadores cuyos derechos básicos son conculcados en un grado aún mayor. A los trabajadores del sector público y a los empleados domésticos no se les han reconocido todavía los derechos de negociación colectiva, mientras que las condiciones de los trabajadores agrícolas y de sus familias han sido calificadas de inhumanas.

117. Se calcula que en 1990 -año de mayor conflictividad laboral que cualquier otro desde que los trabajadores negros adquirieron el derecho a sindicarse- se perdieron cuatro millones de jornadas de trabajo por culpa de las huelgas. Es de lamentar que muchos empleadores hayan seguido respondiendo a una acción laboral legal con despidos masivos, intimidación y hostigamiento, al paso que las fuerzas de seguridad han reaccionado con detenciones y con actos de violencia.

118. También se ha empleado la violencia contra sindicalistas al margen de los conflictos laborales. A este respecto, son motivo de profunda preocupación los disturbios que se han producido en Natal y Transvaal. Los trabajadores han sido las principales víctimas de estos conflictos, en los que han perdido la vida activistas sindicales bien conocidos.

119. Preocupa cada vez más que tras el fenómeno conocido generalmente por "violencia de negros contra negros" estén las provocaciones de los interesados en preservar el sistema de apartheid. El hecho de que la policía y las fuerzas de seguridad no hayan hecho comparecer ante la justicia a los responsables de actos de violencia no puede menos de plantear cuestiones acerca de su identidad y vínculos.

120. Su organización confía sinceramente en que la reciente reunión entre Nelson Mandela y el jefe Buthelezi contribuirá a poner término a la violencia, que constituye el principal obstáculo a la abolición definitiva del apartheid.

121. El Sr. GROSSE (Federación Internacional de Derechos Humanos) dice que a su organización le preocupa particularmente el papel que desempeña la policía en la violencia recurrente de Sudáfrica. En julio de 1990, en Sebokeng, miembros de la Inkatha atacaron a los ocupantes de residencias para trabajadores que se encontraban bajo protección policial. En septiembre, miembros de la Inkatha realizaron otro ataque armado contra un tren con destino a Soweto; según los testigos, la policía no hizo nada para proteger a los pasajeros. En ambos casos, la policía había recibido aviso previo de la inminencia de un ataque.

122. Según numerosos informes, en otras barriadas la policía desarmó a residentes de la comunidad, mientras que a los miembros de la Inkatha les permitió conservar sus armas.

123. Por entonces, según el Código Zulú de Natal, a los miembros de la Inkatha, que eran zulúes, se les permitía llevar armas como parte de su atuendo tradicional, en particular hachas de guerra, lanzas y estacas con puntas de hierro. En virtud de la enmienda ulterior de esta ley, se autorizaba a la policía a expedir permisos de tenencia de armas a ciertos

grupos y a denegárselos a otros. Según una junta investigadora independiente formada por abogados y clérigos, desde noviembre de 1990 los ataques fueron realizados por pequeños grupos provistos de armas de fuego del tipo AK-47, mientras que en agosto y septiembre tales ataques fueron perpetrados por grupos más numerosos provistos de armas tradicionales. También hubo asaltos cometidos por integrantes de grupos de extrema derecha, tales como la Orden de la Muerte.

124. En el informe de la Comisión Harms se imputaba a una unidad policial, la Oficina de Cooperación Civil (CCB), la responsabilidad por la comisión de un gran número de crímenes violentos. Sin embargo, el fallo fue que el jefe de la CCB y otras autoridades responsables no eran culpables. En enero de 1991, un ex funcionario de la policía, Dirk Coetzee, reveló la existencia de escuadrones de la muerte en el seno de la policía. En un informe publicado por una organización no gubernamental se llega a la conclusión de que muchos miembros de la policía y de las fuerzas armadas están implicados en actividades de sabotaje y desestabilización. Este informe, en el que se pide una investigación judicial independiente sobre estas acciones, ha sido respaldado por varios jueces y personas eminentes.

125. Su organización pide que el Gobierno ejerza un auténtico control sobre la policía a fin de garantizar su imparcialidad, que los funcionarios de la policía sean responsables de sus actos, que se examinen los métodos policiales y que se realice una investigación judicial sobre la conducta de la policía y las fuerzas armadas. Además, debe ordenarse el cierre de las residencias de trabajadores, desarmarse a los residentes de las barriadas, estacionar patrullas en todos los terminales ferroviarios, disolverse los comandos policiales de asesinos a sueldo y disponerse la presencia efectiva de la policía siempre que haya probabilidad de producirse un ataque.

126. La Sra. SINEGEORGIS (Etiopía), haciendo uso de la palabra en ejercicio de su derecho de respuesta, dice que, en la sesión precedente, los representantes de tres organizaciones no gubernamentales formularon acusaciones infundadas contra su país. Esas organizaciones desconocen la historia de Etiopía o la están tergiversando deliberadamente para sus propios fines políticos. Es evidente que, al repetir año tras año semejantes tergiversaciones y comentarios tendenciosos, están ayudando a los secesionistas que se esfuerzan por debilitar y desmembrar a una antigua nación.

127. Si estas organizaciones hubieran descrito exactamente la situación que impera en su país, habrían revelado los actos terroristas de los secesionistas y sus secuaces, en particular los ataques indiscriminados e inhumanos contra poblaciones civiles y el sabotaje de instalaciones e infraestructuras.

128. En pasadas declaraciones, su delegación informó a la Comisión sobre las iniciativas de paz emprendidas por su Gobierno en el transcurso de los años y los numerosos obstáculos creados por los secesionistas. Se han celebrado dos rondas de negociaciones sobre cuestiones de procedimiento con uno de los grupos secesionistas de la región autónoma de Eritrea. Sin embargo, los secesionistas siguen negándose a convenir una fecha para el comienzo de las conversaciones de fondo, cerrando de esa manera todas las vías hacia una solución pacífica.



129. En contra de lo alegado por una de las organizaciones no gubernamentales, la fijación de una fecha para las discusiones no depende únicamente del Gobierno etíope, sino que está subordinada al acuerdo mutuo de las partes interesadas. Por consiguiente, la declaración de la organización aludida demuestra su completa parcialidad y falta de veracidad.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.